

Acuerdo de Paz en Colombia: **AJUSTES DEL NEOLIBERALISMO ORTODOXO**

Giorgio Boccardo



Fuente: www.elmontonero.pe

RESUMEN:

A partir de los resultados del referéndum sobre el Acuerdo de Paz en Colombia, se analiza la génesis histórica de la violencia política y su relación con la transformación neoliberal en ese país. En ese sentido, se aborda la trayectoria de la constitución de la alianza social y política que permite la consolidación de este proyecto, y las resistencias que se han presentado ante éste. Se concluye que las tensiones que provoca el Acuerdo de Paz son expresión de una negociación inconclusa dentro de la alianza dominante por la orientación que tendrá el neoliberalismo local una vez que se “liberen” los territorios ocupados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)..

PALABRAS CLAVE:

- Neoliberalismo ortodoxo.
- Violencia política
- Desarticulación social
- Alianza dominante
- FARC.

El 2 de octubre pasado, el 50,2% de los colombianos dijeron “no” al Acuerdo de Paz¹ alcanzado entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y las FARC en La Habana, causando perplejidad en el mundo entero. El acuerdo, que esperaba poner fin a más de 50 años de conflicto armado y violencia política, incorporaba el cese definitivo de los enfrentamientos y un programa de desmilitarización de las zonas ocupadas por la guerrilla, una reforma agraria integral, un plan de erradicación de las plantaciones de coca de los territorios en conflicto, la inclusión de las FARC en la vida política nacional y un sistema de justicia transicional que juzgue los crímenes de guerra y lesa humanidad².

¿Cómo explicar unos resultados que ningún político, analista o encuesta pudo prever? Se dirá que, en un contexto de elevada abstención, la Campaña por el No encabezada por el ex presidente Álvaro Uribe fue más efectiva en movilizar a la población más conservadora del país; en tanto que, la Campaña por el Sí, habría tenido serias dificultades para articular unitariamente a los partidos oficialistas y a la izquierda. Otros interpretan los resultados como un rechazo a las FARC por su responsabilidad en la expansión de la violencia y el narcotráfico. Incluso hay quienes señalan que el referéndum fue una evaluación a la gestión del gobierno de Santos. Sin embargo, poco se discute la desafección de la sociedad con la política institucional, expresada en la elevada abstención o el carácter social y políticamente excluyente de las fuerzas institucionales que encabezan la negociación, que, en lo fundamental, se proyectan en el acuerdo recién alcanzado.

El propósito de estas reflexiones es proporcionar una mirada de mayor alcance que proponga claves interpretativas sobre el origen de la violencia política y la radical instalación del neoliberalismo en Colombia. Se propone que la sociedad colombiana ha sido radicalmente desarticulada y que en el referéndum terminan participando algunas de las bases que movilizan los partidos tradicionales, pese a que hoy no sean los mismos que hace algunas décadas. De lo que se trata, en definitiva, es de una negociación entre distintas fracciones de la clase dominante por la orientación que tendrá el neoliberalismo local (más nacional o con mayor predominio del capital multinacional) una vez que se desmilitarice el territorio ocupado por las FARC.

I. TRAS LOS ORÍGENES SOCIALES DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN COLOMBIA

Hasta la década del setenta, el modelo político colombiano se caracterizó por la hegemonía del Partido Liberal y el Partido Conservador, los que, bajo diversas modalidades de violencia política, impidieron el ascenso de distintas fracciones subalternas en la alianza dominante. Inicialmente, liberales expresaban las aspiraciones de grupos industriales nacionales, franjas medias y de trabajadores urbanos, mientras que los conservadores daban cuenta de los intereses de la oligarquía primario exportadora del café, socialcristianos y fracciones nacionalistas del Ejército.

Tras el derrocamiento del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) y su intento de construir una alianza popular, liberales y conservadores forman el Frente Nacional en 1957. El pacto implicó la rotación de la Presidencia, la distribución equitativa de los cargos en todas las instituciones del Estado y la exclusión política de las fuerzas no organizadas ni representadas por los partidos oficiales³. El basamento de esta “dictadura constitucional” residía en el monopolio bipartidista de la representación popular y de los aparatos electorales, quedando bloqueadas las vías institucionales para que se expresara una oposición, por lo que, por mayoritaria que fuese, tendría como única forma de expresión política la abstención electoral⁴.

1 La abstención fue del 62,6%. Las regiones afectadas directamente por el conflicto votaron mayoritariamente por el Sí; en cambio, las ciudades del centro -que electoralmente tienen más peso- se inclinaron por el No.

2 Los contenidos del Acuerdo de Paz se encuentran disponibles en: <http://www.acuerdodepaz.gov.co/>

3 García, A. (1977). Colombia: medio siglo de historia contemporánea. En González Casanova, P. (coord.). *América Latina: historia de medio siglo*. Volumen 1. México D.F.: Siglo XXI editores.

4 Rouquié, A. (1984). *El estado militar en América Latina*. Buenos Aires: Emecé.

Bajo este panorama político se define la nueva fisonomía del modelo capitalista dependiente colombiano. La estructura productiva se articuló en torno a la industria de bienes intermedios y de capital, e introdujo, a través de las corporaciones multinacionales, técnicas productivas más intensivas en tecnología para apoyar a la industria ensambladora⁵. Pese a la diversificación del proceso económico y la complejización de las políticas de industrialización, el crecimiento alcanzado en la década del sesenta fue limitado y la oligarquía primario exportadora siguió siendo dominante.

La fisonomía social colombiana también se transforma. Se fortalecen los grupos industriales y financieros en la región de Antioquía y se acrecienta la inversión extranjera en áreas no vinculadas directamente a los enclaves frutícolas o petroleros. Las franjas medias profesionales ocupadas en la burocracia pública y privada se consolidan, pero, a diferencia de otras experiencias en América Latina, no son capaces de desafiar a la oligarquía organizada en torno al bipartidismo⁶. En tanto, se afianzan las centrales sindicales de los obreros industriales. Finalmente, se expanden los grupos marginales, producto de la urbanización acelerada por la violencia rural, que se asientan en la periferia de las ciudades. Pese a estos cambios, las tensiones sociales siguen estando marcadas por la cuestión campesina.

Al alero de estos cambios, el conflicto social se acrecienta. Proliferan protestas urbanas que involucran a miles de empleados de la banca y obreros de las industrias y los enclaves de propiedad nacional y extranjera⁷. Son movilizaciones que demandan mejoras en las condiciones de vida, sin que necesariamente se cuestione la hegemonía liberal-conservadora. El Frente Nacional intenta controlar la situación por medio de la intervención de las centrales de trabajadores afines, pero la expansión de un sindicalismo autónomo y otro comunista impiden un nuevo cierre elitario de la protesta. Ante la ineficacia del intervencionismo estatal, los gobiernos recurren a los modos tradicionales de represión violenta, el encarcelamiento y el asesinato de dirigentes.

Cuando la violencia en el campo se intensifica, el presidente conservador Guillermo León Valencia (1962-1966) interviene militarmente en el conflicto. En 1964, los altos mandos del Ejército colombiano, apoyados por las milicias de los terratenientes y asesores estadounidenses, inician una ofensiva bélica contra las “repúblicas independientes” controladas por los grupos de autodefensa campesina⁸. Al calor de la resistencia armada, esos grupos de medianos y pequeños campesinos devienen una guerrilla móvil que, paulatinamente, se unifica en una poderosa fuerza militar. Con la participación de dirigentes comunistas se forman, ese mismo año, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En 1965, se constituye el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de orientación guevarista, al que se integra el Frente Unido del teólogo Camilo Torres, quien hace un llamado a los cristianos a enfrentar la violencia del Estado mediante la lucha revolucionaria. En 1967 irrumpe otra guerrilla rural, el Ejército Popular de Liberación (EPL) cuya ideología se anclaba en el comunismo maoísta. Todas estas organizaciones se declaran contrarias a la oligarquía y al imperialismo de los Estados Unidos y promueven la construcción de una nación soberana e independiente; sin embargo, difieren en las tradiciones revolucionarias que reivindican, en los métodos de lucha armada que utilizan y en los vínculos que establecen con las fuerzas sociales y políticas urbanas⁹.

La alternancia fijada por el pacto del Frente Nacional concluye en 1978. En las primeras elecciones abiertas en décadas, el Partido Liberal triunfó. Sin embargo, la expresión democrática mayoritaria

5 Ocampo, J. A. y Tovar, C. (2000). Colombia in the Classical Era of 'Inward-Looking Development', 1930–74. En Cárdenas, E., Ocampo, J. Y Thorp, R. (eds.). *An economic history of twentieth-century Latin America, Volumen III*. UK: Palgrave Macmillan, pp. 239-281.

6 Cardoso, F. H. y Faletto, E. (1969). *Dependencia y desarrollo en América Latina*. México D. F.: Siglo XXI Editores.

7 Caicedo, E. (1974). *Historia de las luchas sindicales en Colombia*. Bogotá: Editorial Labor.

8 Olave, G. (2013). El eterno retorno de Marquetalia: sobre el mito fundacional de las FARC-EP. *Folios*, (37), pp. 149-166.

9 Löwy, M. (2007). *El Marxismo en América Latina: antología, desde 1909 hasta nuestros días*. Santiago: Lom Ediciones.

seguía siendo la abstención. El veto oligárquico al procesamiento de intereses subalternos y la violencia de aniquilamiento ejercida por el Estado hegemonizado por conservadores y liberales, transforman la lucha armada en la única estrategia efectiva de oposición y emergencia política¹⁰. En adelante, estas organizaciones armadas cuentan con el progresivo apoyo popular de las masas, pero también de intelectuales y franjas estudiantiles desilusionadas de la promesa democratizante de los liberales. En contrapartida, la oligarquía terrateniente, los capitales multinacionales y el empresariado nacional comienzan a promover el desarrollo de grupos paramilitares y a establecer puentes con el narcotráfico para enfrentar a las guerrillas.

II. VIOLENCIA POLÍTICA Y FORMACIÓN DE LA ALIANZA NEOLIBERAL

En los años setenta, Colombia es uno de los pocos países latinoamericanos que no atraviesa por una dictadura militar (en el sentido convencional del término). Sin embargo, hacia 1978 los rasgos autoritarios del régimen político se exageran y el poder militar gana terreno sobre aquel ejercido por los partidos tradicionales. Posteriormente, el esquema tripartito de control social y político de la sociedad, alcanzado por militares, grupos empresariales y el erosionado bipartidismo liberal-conservador, evita la crisis total del sistema político institucional¹¹.

Es en este marco autoritario que se desenvuelve la crisis de los años ochenta¹². El sobreendeudamiento y la interrupción de los flujos de financiamiento debilitan las estructuras productivas, al tiempo que se expande la desigualdad, el desempleo y la pobreza. Se produce una crisis financiera mayor que lleva a la quiebra y a la nacionalización de varios bancos. Ahora bien, los ingresos acumulados que producían las exportaciones del café le permiten al Estado sortear este periodo sin recurrir al endeudamiento extremo. De todas formas, los ochenta arrancan en medio de una fuerte desaceleración económica, un agudo desequilibrio de la cuenta corriente y un considerable deterioro de las finanzas públicas.

En plena crisis, se produce la inesperada elección de un renovado conservadurismo socialcristiano, encabezado por Belisario Betancur (1982-1986), que arriesga el inestable equilibrio de fuerzas alcanzado en la alianza dominante¹³. Resuelto a desmilitarizar el país, el nuevo presidente levanta el estado de sitio, ofrece a los guerrilleros una amnistía incondicional e inicia una investigación de la organización paramilitar Muerte a los Secuestradores¹⁴. En política internacional, se distancia de la posición pro estadounidense y se vincula a países no alineados de América Latina. A nivel social, alienta la reactivación de las organizaciones sindicales de izquierda, como es la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia¹⁵. Para enfrentar la grave crisis económica, su administración puso en marcha varios programas de ajuste que buscaron infructuosamente frenar la devaluación de la moneda local y el espiral inflacionario.

En la arena política, el primer intento de institucionalizar el poder de las FARC se da en 1983 cuando se funda la Unión Patriótica, integrada por guerrilleros, militantes del Partido Comunista y sectores democráticos de los partidos tradicionales¹⁶. Este esfuerzo por enfrentar al bipartidismo liberal-conservador se proyecta rápidamente a nivel local, gracias a la aprobación de una ley que permite

10 Boccardo, G. (2014). *Neoliberalismo avanzado en América Latina. Los casos de Colombia, México y Perú*. Santiago: Tesis para optar al grado de Magíster en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile.

11 *Op. Cit.*, 4.

12 Londoño, J. L. (1995). *Distribución del ingreso y desarrollo económico: Colombia en el siglo XX*. Bogotá: TM Editores; Salomón, K. (2010). *Nueva historia económica de Colombia*. Bogotá: Fundación Universidad Jorge Tadeo Lozano.

13 *Op. Cit.*, 10.

14 Es la primera manifestación del paramilitarismo a gran escala en Colombia y constituye una respuesta de los terratenientes, ganaderos y narcotraficantes a los ataques de las guerrillas populares.

15 *Op. Cit.*, 4.

16 Estrada, J. (2006). Élités intelectuales y producción de políticas económicas en Colombia. En Estrada, J. (ed.). *Intelectuales, tecnócratas y reformas neoliberales en América Latina*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, pp. 259-320.

la elección directa de los alcaldes, al punto de convertirse en una fuerza de alcance nacional. Pese a ello, se trata de una experiencia de muy corta duración, dado el exterminio sistemático al que se vieron sometidos sus dirigentes por parte de grupos paramilitares y del narcotráfico¹⁷.

Es durante este enfrentamiento extendido a lo largo de la década de los ochenta que se fragua una particular alianza entre las oligarquías primario exportadoras, los grandes grupos empresariales nacionales, el capital multinacional y las fuerzas militares con el narcotráfico y los grupos de autodefensa paramilitar. Ahora bien, es la amenaza de formación de una fuerza política institucional -que exprese intereses de fracciones subalternas con independencia de los partidos tradicionales-, y un proyecto de desarrollo nacional protegido, lo que termina sellando el pacto.

Sin los “empresarios de la cocaína” y la expansión de los grupos de autodefensa no hubiese sido posible que la alianza que asociaba a las fuerzas legales del capitalismo colombiano se sostuviera en un sistema político y social totalmente excluyente¹⁸. En adelante, los narcotraficantes y los grupos paramilitares, con el respaldo de terratenientes, empresarios nacionales y multinacionales, empiezan a tener el control militar de territorios e incluso clientelas campesinas¹⁹. En ese sentido, el paramilitarismo puede ser considerado como un modo de articular las formas ilegales y legales de acumulación. Por ende, explica también el origen de los nuevos grupos empresariales que se proyectan en los años noventa.

En este mismo periodo, el control territorial que ejercen las FARC y el ELN sobre una fracción considerable del país les permite ensayar modos de influencia en los gobiernos locales, tales como juicios sobre la gestión de alcaldes, formas de tributación sobre la producción o extensión de la tierra, “justicia guerrillera” para zanjar conflictos entre miembros de comunidades campesinas y la formación de organizaciones populares civiles para imponerse en la arena electoral²⁰. Sin embargo, en la medida en que falla la institucionalización política de la Unión Patriótica, las guerrillas quedan reducidas a ejercer su poder territorial mediante el control militar, debiendo recurrir, cada vez más, al amedrentamiento de la población en tanto recurso de control social y al financiamiento que provee el narcotráfico.

En suma, a fines de los años ochenta, el Estado colombiano ha fracasado en su intento por constituirse en el aparato legítimo de dominación de las oligarquías exportadoras y los grupos industriales, y además resulta ineficaz para asegurar los intereses del capital multinacional. Asimismo, el bipartidismo liberal-conservador, aliado con los militares y el gran empresariado local, tampoco resulta capaz de integrar subordinadamente en un proyecto nacional a las franjas subalternas de la ciudad, menos de resolver la cuestión campesina. Producto de esta incapacidad, a fines de la década del ochenta, comienza a fraguarse un nuevo consenso entre las distintas fracciones de la alianza que controla el país, las legales y las ilegales, que consiste en empujar una transformación radical a la orientación del desarrollo nacional, a saber, una variante neoliberal en extremo ortodoxa.

III. ORTODOXIA NEOLIBERAL Y RESISTENCIAS DESARROLLISTAS

La construcción del nuevo consenso supuso una reconfiguración de la alianza dominante, la que se fundamentó en el debilitamiento estructural de la economía cafetalera, el retraso de algunos sectores de la industria, el estancamiento de la agricultura, el mayor peso de la actividad

17 Ortiz, I. (2006). *Genocidio político contra la Unión Patriótica. Nuevas miradas para nuevas lecturas*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

18 Palacios, G. (1989). *La irrupción del paraestado. Ensayos sobre la crisis colombiana*. Bogotá: ILSA, Cerec.

19 *Ibid.*

20 Aguilera, M. (2006). *Insurgencia y construcción de poder popular. Una perspectiva histórica desde la historia de Colombia*. Ponencia presentada en V Seminario Internacional Marx vive. Alternativas y gobiernos en América Latina, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.

financiera, así como también en el surgimiento de la economía del narcotráfico y en las dificultades de legitimación de la acción estatal en el conjunto del territorio nacional. En este cambio tendrán un papel fundamental los grupos empresariales –que presionan por nuevas formas de inserción en los mercados internacionales–, las nuevas burocracias estatales de orientación neoliberal, el capital multinacional y la renovación de parte de la elite política liberal y conservadora²¹.

La presidencia de Cesar Gaviria (1990-1994) abre cauces para que el gran empresariado nacional, una fracción de la oligarquía primario exportadora, capitales multinacionales y tecnocracias monetaristas presionen sobre una fracción del Partido Liberal con el fin de proyectar reformas estructurales. Su programa de orientación neoliberal será resistido por sectores del desarrollismo liberal y del nacionalismo conservador. Sin embargo, el amplio respaldo de las fuerzas que lo sustentan, más el creciente accionar de grupos paramilitares y el narcotráfico para desmovilizar a las fuerzas sindicales y a los nacientes partidos de izquierda, permitirá que este proyecto avance en forma sostenida.

Desde un comienzo, el nuevo equipo económico de Gaviria empujó reformas que debían avanzar, al mismo tiempo, en la desregulación de la economía y en sentar las bases para la transformación de la acción estatal. Se trata entonces de reformas que, en su gran mayoría, favorecen la orientación primario exportadora y financiera de la economía o de aquellos grupos industriales con capacidad de insertarse en los mercados internacionales; a su vez, favorecen también el desembarco masivo de capitales multinacionales y la pérdida de peso de los sectores productivos de menor tamaño, cuya manufactura estaba orientada al mercado interno. De este modo, las primeras medidas implementadas precarizan las condiciones de trabajo y elevan el costo de reproducción de la vida –producto del alza de impuestos al consumo–, lo que perjudica de forma considerable a las franjas medias y obreras asalariadas.

El gobierno de Gaviria busca institucionalizar los avances alcanzados y convoca a la realización de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución. En ella participan las fuerzas políticas tradicionales, aquellas que emergieron en los ochenta y los sectores desmovilizados de la guerrilla, como el M-19 y el EPL. Aunque fue caracterizado como un acuerdo de paz, el proceso constituyente no logró incluir a las principales fuerzas guerrilleras rurales: las FARC y el ELN.

El texto aprobado en 1991 incluye aspectos medulares de la política neoliberal y otros centrados en lo que podrían ser considerados los fundamentos de un Estado garante de derechos²²; sin embargo, el equilibrio de fuerzas de la Asamblea Constituyente, que fuerza tal ambigüedad constitucional, no se reproduce en la elección del primer Congreso. La intensificación posterior de la guerra interna, llevan a un cada vez más endeudado Estado a depender de los recursos de las privatizaciones y de la capacidad de inversión y financiamiento de los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros²³.

Inicialmente, los economistas desarrollistas intentan morigerar el avance radical del programa de desregulación impulsado por Gaviria. Sin embargo, la violencia política vuelve a estallar, transformándose en la prioridad nacional. El avance de las FARC amenaza con hacerse del control de la mayoría del territorio nacional y poner fin al Estado colombiano. Ese mismo año se reactiva la guerra entre los poderosos carteles de Cali y Medellín, lo que, a su vez, moviliza a muchos grupos de paramilitares. El gobierno convoca a un gabinete de “salvación nacional” integrado por casi todas las fuerzas políticas, las que le otorgan amplios poderes para hacerle frente a esta nueva guerra civil. En tanto, el Presidente deposita su confianza en el papel que podían jugar los grupos de autodefensa, sobre todo en aquellos territorios donde gobernaba la guerrilla o el

21 *Op. Cit.*, 10.

22 Mejía, O. (2012). La constitucionalización de la mentira. Bogotá. Recuperado de: www.espaciocrítico.com.

23 Estrada, J. (2006). Las reformas estructurales y la construcción del orden neoliberal en Colombia. En Ceceña, A. *Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado*. Buenos Aires: Clacso.

narcotráfico. Esto permite que los grupos económicos nacionales y el capital multinacional puedan institucionalmente financiar sus propias milicias para defender intereses, en la mayoría de los casos ubicados en zonas geográficas en que el orden público era precario²⁴.

Este es el marco propicio para que las tecnocracias neoliberales, reacias a toda institucionalidad democrática, dejen trazado el derrotero ortodoxo para los gobiernos venideros. En efecto, al calor del enfrentamiento contra la guerrilla y el narcotráfico, se impulsa la creación de un sistema mixto de pensiones que se abre al capital privado; se reorienta el papel del Estado en el sector eléctrico y se desmonta el sistema de subsidios para la población; además, se desregula el sector educativo a nivel superior consolidando la organización de un mercado privado²⁵.

El gobierno del liberal Ernesto Samper (1994-1998), en lo esencial, se mantiene en línea con el programa neoliberal de su antecesor. Pese al discurso revisionista con el que triunfa, en la práctica su gestión se caracteriza por contener la celeridad con que se ejecutaba la liberalización de mercados, sobre todo por sus consecuencias sobre algunos grupos industriales nacionales²⁶. De todas formas, durante su mandato se autoriza la venta de activos estatales y se crean nuevas formas jurídicas de organización empresarial para responder a los procesos que regulan las fusiones de grandes conglomerados económicos a las que fuerza la apertura impulsada²⁷. Adicionalmente, Samper permite que la inversión extranjera se incremente al eliminar restricciones a la inversión en servicios públicos, hidrocarburos y minería, a lo que se suman las facilidades que otorga para la libre circulación de los capitales.

En 1996, sin embargo, las FARC encienden las alarmas en todo el mundo al propiciar una serie de derrotas al Ejército colombiano, que demuestran su preparación para pasar de la larga guerra de posiciones a una guerra abierta de movimientos²⁸. Esto se traduce en una creciente presión de los grupos económicos sobre el gobierno de Samper, además de la del propio gobierno de los Estados Unidos²⁹. En particular, en la región de Antioquía, epicentro de los grandes grupos económicos nacionales, bajo la gobernación de Uribe se apoya y financia a decenas de grupos paramilitares para la defensa de la propiedad y el combate contra la guerrilla. Ello produce el desplazamiento de cientos de miles de campesinos y sienta las bases de lo que será, posteriormente, la organización nacional de paramilitares, a saber, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Al final del gobierno de Samper se desata un escándalo por los “narco dólares” que habrían financiado su campaña electoral, obligándolo a hacer todo tipo de concesiones con el objetivo de poder terminar su mandato. En 1997, en medio de un turbulento escenario internacional, se registra una aguda recesión económica y una crisis del sector financiero, extendida hasta el gobierno del conservador Andrés Pastrana (1998-2002). Lo anterior permite la injerencia directa de los Estados Unidos en territorio colombiano, a través del Plan Colombia. Este último, además de ofrecer suculentos paquetes de ayuda económica a cambio de reformas estructurales, consolida la influencia militar de ese país sobre América Latina, al mismo tiempo que genera condiciones para que la alianza dominante recupere, por medio de la violencia, territorios y recursos para consolidar su expansión económica y su poder social³⁰. Una vez más, la violencia política termina por dirimir la orientación del modelo de desarrollo colombiano.

24 *Op. Cit.*, 10.

25 *Op. Cit.*, 15.

26 De hecho, en este periodo el Grupo Empresarial Antioqueño inicia un proceso de reestructuración que se orienta a su internacionalización. Ver Londoño, L. (2004, febrero). Grupo Empresarial Antioqueño. Evolución política y estrategias, 1978-2002. *Revista EIA*, (1), pp. 47-62.

27 Novoa, E. (2005). Reestructuración, campo jurídico y Corte Constitucional. En Estrada, J. (ed.). *Intelectuales, tecnócratas y reformas neoliberales en América Latina*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, pp. 347-382.

28 *Op. Cit.*, 10.

29 *Op. Cit.*, 15.

30 *Op. Cit.*, 10.

V. VIOLENCIA POLÍTICA Y CONSOLIDACIÓN DEL NEOLIBERALISMO COLOMBIANO

A diferencia de otras experiencias en América Latina, en las que la crisis de la segunda mitad de los noventa generó reversiones significativas en la orientación del modelo, en el caso colombiano el proyecto neoliberal se profundizó³¹. En efecto, la grave crisis económica de 1998-1999, la peor en la historia de este país, más que deslegitimar la transformación neoliberal impulsada, la reafirma. Sobre todo, a partir del impulso que generan los recursos del Plan Colombia a comienzos del siglo XXI.

Los gobiernos de Uribe (2002-2010) consolidan el proyecto neoliberal mediante la aplicación de reformas de “segunda generación” que buscan acabar con los “lastres desarrollistas” de la política económica y de la acción estatal. Pese a provenir de las filas del liberalismo, su posición abiertamente ortodoxa en lo económico y autoritaria en lo político lo lleva a quebrar con el liberalismo desarrollista, y busca apoyo de partidos de derecha como Cambio Radical. Durante su mandato se profundizan los rasgos autoritarios del régimen político, se intensifica el combate contra las guerrillas y se abren espacios para la institucionalización del paramilitarismo. De hecho, el fracaso de las conversaciones entre Pastrana y las FARC, promueve la formación de un acuerdo político entre las fuerzas dominantes para buscar una salida armada al conflicto social en curso³². Ese consenso, plasmado en la doctrina de “seguridad democrática”, se construye con el respaldo de los principales grupos empresariales, los grandes medios de comunicación, las altas jerarquías de la Iglesia Católica, una mayoría del Congreso, las Fuerzas Armadas, intelectuales afines al neoliberalismo y el gobierno de los Estados Unidos³³.

El gobierno de Uribe se propuso abrir mejores condiciones para la inversión extranjera, proyectar al empresariado colombiano en los mercados internacionales y promover políticas para la cohesión social apoyado, fuertemente, en el papel que podía cumplir el sector privado. Sus primeras medidas consistieron en empujar un agresivo plan de inversiones públicas, el cual, si bien eleva la deuda externa a niveles históricos, le permite recuperar el tranco del crecimiento económico³⁴. Se aprueba una ley de responsabilidad fiscal y se continúa con la política de privatización de entidades públicas³⁵. En paralelo, el propio Uribe encabeza una agresiva política de concesiones a capitales privados para la explotación de recursos naturales en los territorios liberados por los paramilitares. Se afianza, de hecho, la política del ajuste fiscal por la vía legal mediante la “flexibilización presupuestal”, que significa la modificación de una proporción considerable de la estructura del gasto público que está determinado por ley, lo que afecta las condiciones de financiamiento de derechos fundamentales y garantiza en el tiempo el pago de la deuda pública y las tareas del Estado en materia de seguridad. En materia laboral, se continúa el proceso de flexibilización del mercado de trabajo y se reduce el tamaño de la burocracia³⁶. La segunda reforma al sistema de pensiones establece el imperativo de disminuir los pasivos de las pensiones del sector público y de elevar las tasas de ahorro nacional. El cumplimiento de estos objetivos, sostenidos por el ahorro de cientos de miles de asalariados, permite al Estado colombiano acceder a mayor financiamiento externo y así sostener el avance del programa neoliberal.

Uribe corona su primer mandato con la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en 2006. Con ello, termina de insertar a la economía colombiana en los mercados internacionales y genera condiciones para el desembarco masivo de capitales multinacionales, así como también

31 Ruiz, C. (2013). *Estructura Social, Estado y Modelos de Desarrollo en América Latina Hoy. Elementos para una interpretación sociológica de la transformación reciente*. Santiago: Tesis para optar al grado de Doctor en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile.

32 Echandía Castilla, C. (2004, octubre). La guerra por el control estratégico en el Suroccidente colombiano. En *Revista Sociedad y Economía*, (7), pp. 65-89.

33 *Op. Cit.*, 10.

34 *Op. Cit.*, 12.

35 *Op. Cit.*, 15.

36 *Ibid.*

abre cauces para que el gran empresariado nacional, que sorteó la radicalidad de las reformas neoliberales, se proyecten en América Latina y, en general, puedan invertir en el mundo entero.

El auge económico alcanzado en su primer mandato le permite a Uribe consolidar su autoridad e impulsar la nueva doctrina de seguridad nacional, la que privilegia el enfrentamiento armado y el fortalecimiento de los paramilitares, por sobre la negociación política y el ejercicio de las libertades democráticas por parte de la ciudadanía. Su proyecto representa la institucionalización de un régimen de excepcionalidad permanente: una suerte de bonapartismo, que intenta el control sobre todos los poderes públicos³⁷. Para ello, Uribe fortalece los organismos de inteligencia oficiales, que en adelante le rinden cuentas directamente; y les asigna a las AUC un papel central en la lucha contra las guerrillas³⁸. Ahora bien, en la práctica, los organismos de seguridad oficiales y los paramilitares terminan fundiéndose en una sola fuerza político militar, la cual, apoyada económicamente en los ingresos del narcotráfico, deviene en elemento clave para sostener el régimen de Uribe.

Esta fuerza político militar no sólo enfrenta a las FARC y al ELN. Cumple un papel central en el financiamiento de las campañas políticas, además de movilizar electoralmente a la población de los territorios que controlan militarmente. Mediante diversos recursos, reprimen a las fuerzas que intentan constituirse como una alternativa al uribismo y su proyecto neoliberal, pero también a los propios poderes del Estado cuando su accionar entorpece el desenvolvimiento de las reformas. Sus redes de poder se expanden sobre diversos ámbitos de la administración estatal, el alto mando del Ejército, tribunales de justicia, el Parlamento y sectores empresariales nacionales y multinacionales. Por último, los territorios “liberados” -abundantes en petróleo y productos mineros-, en vez de ser devueltos a los campesinos desplazados, son explotados por capitales nacionales y multinacionales, constituyéndose en una genuina “acumulación por desposesión”³⁹.

Ahora bien, esa política de “seguridad democrática” no doblega militarmente a las FARC. En tanto, los escándalos de parapolítica que vinculan a estos grupos con sus partidarios y su propia familia, erosionan el poder de Uribe⁴⁰. Su promesa de doblegar a las FARC en menos de 2 años no logra ser cumplida, y durante su segundo mandato nada indica que se estuviera al final de la guerra en Colombia. A lo anterior se suma el creciente papel de las luchas y resistencias sociales, sobre todo de las organizaciones de derechos humanos, fuerzas estudiantiles, socioambientales y sindicatos, que se constituyeron en el Polo Democrático Alternativo (PDA). De todas formas, Uribe fue capaz de “convencer” al Congreso de una reforma constitucional para permitirle su reelección y, luego de ello, a los propios colombianos para que le otorgaran un segundo mandato presidencial en base al recién formado Partido Social de Unidad Nacional (o Partido de la U como es usualmente llamado). Pese al enorme despliegue de las fuerzas uribistas para asegurar su triunfo, destaca la irrupción electoral de un PDA que logró presentar un candidato presidencial que obtuvo cerca del 23% de los votos.

Son varios los factores que inciden sobre el proceso de unidad de la izquierda colombiana en torno al PDA. En primer lugar, el contexto de la ofensiva generalizada que representa el proyecto de la “seguridad democrática” contra las organizaciones civiles de la sociedad. Por otra parte, la ofensiva en oposición al referendo fiscal convocado por Uribe el 2003 y las luchas contra las negociaciones del Gobierno en torno a la firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos, materializado el 2006. A su vez, destaca la oposición, de varias de las fuerzas que componen el PDA, a las reformas políticas que fuerzan a los partidos a alcanzar acuerdos que pueden desdibujar su programa, y

37 Moncayo, V. (2004). *El leviatán derrotado. Reflexiones sobre teoría del Estado y el caso colombiano*. Bogotá: Editorial Norma.

38 García-Peña, D. (2005). La relación del Estado colombiano con el fenómeno paramilitar: por el esclarecimiento histórico. *Análisis político*, 18(53), pp. 58-76.

39 *Op. Cit.*, 10.

40 Pizarro Leongómez, E. Las FARC-EP: ¿replique estratégico, debilitamiento o punto de inflexión?. En VV.AA. (2006). *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia*. Bogotá: Editorial Norma, pp. 171-208.

el rechazo a la reforma constitucional que establece la figura de la reelección presidencial⁴¹. No obstante el rápido ascenso electoral del PDA, con el muy amplio espectro de fuerzas políticas que aglutina, supone una lucha ideológica interna permanente entre la tradición revolucionaria, comunista, socialdemócrata y aquellos identificados con el “progresismo neoliberal”⁴². En todo caso, en este periodo se constituye como la principal oposición civil al proyecto de Uribe, lo que se expresa en un avance electoral en gobernaciones, municipalidades y el Parlamento en el 2005, cuyo triunfo más destacado fue la alcaldía de Bogotá.

En su segundo mandato, Uribe y la alianza empresarial que lo sustenta, avanza en institucionalizar la “zona gris” que constituían el capitalismo legal e ilegal desde la década del ochenta⁴³. Sin embargo, para alcanzar ese objetivo, debe avanzar hacia la desmovilización y reinserción de los grupos paramilitares en la vida democrática de Colombia. En esa dirección, se organiza desde el Estado una verdadera “operación de limpieza” que incluye mediáticas entregas de armas y juicios políticos que establecen responsabilidades, pero sin entregar justicia ni reparación a las víctimas de la violencia, mediante mecanismos que terminan legalizando patrimonios y propiedades obtenidas por medio de la coerción. Pese a las protestas de diversas organizaciones sociales y los pocos parlamentarios que escapan a la órbita de influencia de los paramilitares, incluso a los fallos judiciales que demuestran los vínculos entre la parapolítica y grupos empresariales, parlamentarios y el propio Presidente, todo parece indicar que el origen violento de las nuevas formas de acumulación del capital en Colombia han logrado institucionalizarse aunque el costo a pagar haya sido la erosión de popularidad del uribismo y de la propia figura del Presidente.

V. UNA INTERPRETACIÓN ALTERNATIVA DEL TRIUNFO DEL “NO”

El triunfo de Santos en las elecciones presidenciales del 2010 representaba la continuidad de la política económica y social impulsada por su predecesor, Álvaro Uribe. Sin embargo, el agotamiento de la política de “seguridad democrática” requería de un ajuste de proporciones. Poco después de asumir su primer mandato, Santos inicia un acercamiento con las FARC con el propósito de alcanzar un acuerdo de paz definitivo que permitiera proyectar el capitalismo colombiano más allá del *boom* económico de comienzos del siglo XXI. Esto último lo lleva a un quiebre con la “línea dura” del uribismo, que, junto a su líder, abandonaron el Partido de la U para encabezar la oposición a todo acuerdo que permitiera la integración de las FARC a la vida política colombiana.

Durante el 2014, las tratativas encabezadas por Santos son respaldadas electoralmente, lo que lo catapulta a su segunda presidencia. En efecto, en la segunda vuelta electoral, Santos se impone al candidato del uribismo, Óscar Zuluaga, quien prometía volver al enfrentamiento armado y a considerar la guerrilla como grupo terrorista.

Este triunfo expresa, por un lado, el giro de la propia alianza dominante hacia la búsqueda de una “fórmula democrática” que pueda prescindir progresivamente del autoritarismo como modo de profundizar el neoliberalismo colombiano; por otro, los anhelos de una ciudadanía que espera acabar con más de 50 años de violencia política. Además, pese a los intentos de articulación de la izquierda y organizaciones de la sociedad civil, no parece existir una fuerza que organice y represente a los sectores subalternos por fuera del renovado bipartidismo colombiano, por lo que no queda otra alternativa que adherir a la variante menos autoritaria de poder, o bien, abstenerse.

En adelante, los Diálogos de Paz entre los equipos negociadores de Santos y las FARC, apostados en La Habana, intentan resolver la reintegración de la guerrilla a la política nacional y la reparación

41 Caycedo, T. (2006). Nuestra presencia en la PDA. *Revista Taller*, (15).

42 Ruiz, C. (2015). *De nuevo la sociedad*. Santiago: Lom ediciones.

43 *Op. Cit.*, 10.

a las víctimas del conflicto, pero también la erradicación de las plantaciones ilegales de droga y una solución para los campesinos y pueblos originarios que habitan en las tierras que aún controlan las guerrillas. Ahora bien, la cuestión de la redistribución de la tierra choca directamente con los intereses de la gran minería y de la agroindustria, los que necesitan excluir crecientemente a campesinos e indígenas. Este problema ha reactivado también la protesta y paralización productiva de un conjunto de organizaciones rurales articuladas en la Cumbre Agraria, en tanto que el gobierno de Santos ha respondido con represión policial e incumplimiento de los acuerdos⁴⁴.

El reciente triunfo del “no” en el referéndum de octubre pasado demuestra la fuerza que todavía detenta el uribismo como máquina electoral, así como también su capacidad de expresar a cierta élite empresarial que no ve con buenos ojos el arribo de las FARC a la política nacional, pero también que intentan negociar los modos de apropiación de los territorios liberados. Por otro lado, da cuenta de una sociedad completamente desarticulada que, sin poder expresarse en alternativas democráticas con capacidad de disputarle el poder a la alianza dominante, termina por convertir la abstención en el único modo de expresión política. De todos modos, el gobierno de Santos reaccionó rápidamente ante la derrota y el 12 de noviembre alcanzó un nuevo acuerdo con las FARC, el cual, en lo fundamental, mantiene los basamentos del acuerdo anterior, pero reduce el alcance de la reforma agraria —a favor de los grupos empresariales nacionales, y en desmedro de los pequeños campesinos— y aumenta la jurisdicción de la justicia ordinaria sobre el procesamiento de los crímenes de guerra y lesa humanidad.

De momento, todo indica que los basamentos del neoliberalismo colombiano parecen completamente consensuados entre los grupos empresariales nacionales, el capital multinacional y toda la nueva intelectualidad tecnocrática que apuestan a expandirse sobre el territorio que resulte “liberado” de las negociaciones con las FARC, para así impulsar otro ciclo de acumulación neoliberal. En todo caso, con el acuerdo alcanzado —que todavía debe ser ratificado en el Congreso—, el uribismo quedará políticamente reducido y, como en otras experiencias latinoamericanas, los grandes grupos empresariales intentarán desmarcarse del autoritarismo impulsado por Uribe. Pese a ello, no puede ser entendido el origen y expansión del neoliberalismo en Colombia sin el uso que hace la alianza dominante de la violencia política como herramienta de acumulación original. ▼

44 Ruiz, C. y Boccardo, G. “¿América Latina ante una nueva encrucijada?”. En Bretoni, M., Charry, C. y Pastor, J. (eds.). *Anuari del conflicte Social 2014*. Observatori del conflicte social, Universitat de Barcelona, pp. 765-783, 2015.

Suscríbete a los

CUADERNOS

DE

COYUNTURA



NODO XXI

FUNDACIÓN NODO VEINTIUNO

Recibe en tu domicilio un ejemplar impreso de nuestra publicación bimestral y ayúdanos a seguir generando conocimiento al servicio de la democratización política, social y económica del país.

*Suscripción anual:
desde \$50.000*.
Suscripción mensual:
desde \$5.000*.*

Para concretar tu suscripción

esríbenos a:

suscripciones@nodoxxi.cl

** Los valores indicados son el aporte mínimo sugerido. Se aceptan aportes superiores mensuales o anuales según la capacidad económica de cada suscriptor.*

**¿QUÉ DATOS NECESITAS
PARA HACER TU DEPÓSITO?**



Fundación Nodo XXI - RUT:
65.065.819-1

Cuenta Corriente N°
Banco de Chile: 008000240709

Correo de confirmación:
suscripciones@nodoxxi.cl

**¿A QUÉ DESTINAMOS
LAS DONACIONES?**

- ▼ A la elaboración y difusión de material de estudio sobre problemáticas políticas, sociales, económicas y culturales, con una perspectiva de derechos y un enfoque que destaca por su originalidad y compromiso con el cambio social.
- ▼ A la organización de actividades de formación de masas críticas a través del debate, la deliberación y construcción de miradas colectivas, especialmente en conjunto con organizaciones y movimientos sociales de relevancia nacional.
- ▼ A la elaboración y socialización de propuestas y opiniones relevantes para la apropiación crítica de nuestra realidad, a través de material para medios de comunicación, redes sociales, columnas de opinión y campañas.